



VOL: AÑO 8, NUMERO 21

FECHA: ENERO-ABRIL 1993

TEMA: IDENTIDAD NACIONAL Y NACIONALISMOS

TITULO: **Los empresarios en la redefinición del proyecto nacional**

AUTOR: *María Teresa Rueda Lugo* [*]

SECCION: Artículos

RESUMEN:

Las prácticas nacionalistas definidas por el Estado (como el proteccionismo, las estatizaciones, el populismo, etc.) ya no funcionaron desde la década de los setenta como referente común para el sector empresarial, por lo que éste se manifestó cuestionando la capacidad hegemónica de la burocracia política para conducir la nación. Fundamentalmente con las medidas de nacionalización bancaria en 1982, la iniciativa privada se reorganizó políticamente para presionar al Estado e incorporar su visión de proyecto nacional. Las demandas de los empresarios tuvieron respuesta durante los mandatos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, hasta que finalmente este sector logró participar en las decisiones de gobierno y por tanto en la conducción del proyecto nacional.

ABSTRACT:

Businessmen: Redefining the National Project.

Nationalistic practices carried out by the State stopped working for the business sector during the 70's. Therefore, the capacity of the political bureaucracy was questioned. During 1982 all banks were nationalized. The private industry reorganized itself politically to pressure the State and include its own vision of the national project. Miguel de la Madrid and Carlos Salinas de Gortari took heed of the businessmen's demands. Finally this sector could participate in the government's decisions and the conduction of the national project.

TEXTO

Introducción

El objetivo del presente trabajo es destacar cómo, hacia las décadas de los setenta y ochenta, el nacionalismo definido por el Estado había dejado de ser un referente de identidad para los empresarios y se generaban cambios en la cultura política [1] de este sector. Ejemplo de ello es que a partir de ciertas medidas presidenciales consideradas como nacionalistas-populistas el sector privado manifestó actitudes de desconfianza, lo que dio lugar a que actuara reorganizándose políticamente en diversos ámbitos que van desde el económico-administrativo a través de sus cámaras, consejos, asociaciones, etc., pasando por su participación en asociaciones civiles, hasta el partidista (particularmente desde la nacionalización de la banca en 1982). Esto le permitió influir en la implantación de un proyecto nacional (vislumbrado en los setenta con la consolidación del Consejo Coordinador Empresarial -CCE-), que durante la década de los ochenta y principios de los noventa coincidió con el que impulsó la tecnocracia; para que ello fuera posible se

tuvieron que dar las condiciones, primero a través de la crisis del modelo de desarrollo estabilizador y segundo, con el surgimiento de las alianzas de la élite política con la iniciativa privada en función de un nuevo paradigma económico, que presupone el despliegue de dos niveles de apertura: la reprivatización de entidades públicas y el ensanchamiento de las estructuras de decisión política como forma de estabilizar las relaciones políticas con la iniciativa privada.

En la implantación de tal proyecto nacional se trata de reformular un nacionalismo que "se presenta en la perspectiva de una necesaria adecuación a las actuales circunstancias internacionales que obligan a participar activamente en los procesos de globalización económica [2] con el objeto de alcanzar un crecimiento económico indispensable" (Salazar, 1991: iv). Desde este enfoque se trata de abandonar los métodos y los instrumentos del viejo nacionalismo, como las estatizaciones y el proteccionismo económico, que en el momento actual sólo debilitarían al país debido al marco mundial de apertura económica y reprivatización. [3]

La redefinición del proyecto nacional implica por otra parte una autocrítica del viejo nacionalismo revolucionario que podría haberse caracterizado como "autoritario, excluyente, intolerante, supresor de libertades, improductivo y solapador de la injusticia, aunque, eso sí, muy pragmático y populista. Un nacionalismo que en nombre de presuntas amenazas a la soberanía justificó represiones violentas y fraudes patrióticos, avaló cacicazgos, acusó como antinacionales y contrarrevolucionarios a movimientos y partidos de oposición y legitimó un presidencialismo sin contrapesos" (Salazar, 1991: IV-V).

I. El enfrentamiento empresarios-Estado

A principios de los años setenta el país se encontraba en una situación de deterioro político, puesto que se agotó el modelo de acumulación y se comprimieron las vías de participación política y social. Tal panorama hizo necesario dar prontas respuestas, de manera que el eje central de la política de Luis Echeverría Álvarez fue fortalecer el papel económico del Estado mediante la limitación del capital extranjero, el aumento del control fiscal para elevar su capacidad financiera y su intervención directa en la economía. Frente a esta situación "los empresarios reaccionaron descontentos ante lo que vivieron como una amenaza del fortalecimiento de la presencia estatal" (Luna y Tirado, 1984: 8).

La situación con la que se enfrentó el sector empresarial fue la siguiente:

- a) Polarización de fuerzas sociales.
- b) Recrudescimiento del lenguaje reformista y populista utilizado por el gobierno para reivindicar la hegemonía.
- c) Tolerancia de ciertas movilizaciones obreras, del sindicalismo independiente (particularmente la Coparmex atacó al Frente Auténtico de Trabajo acusándolo de estar vinculado con la URSS y Cuba, pues esta organización promovía movimientos independientes) y de invasiones en el campo en algunos estados de la República.
- d) Suspensión del trato privilegiado a los empresarios por las dificultades de encauzar normalmente la negociación directa.
- e) Debilidad empresarial en los canales de negociación nacional, al considerársele formalmente como un sector más.

f) Campaña patronal de unificación de clase bajo una tónica de conflicto (Millán, 1988: 52-53).

g) La política exterior del gobierno también causaba irritación a los empresarios debido a que su "posición antiimperialista estrecha relaciones diplomáticas con países como China, URSS, Cuba y Chile" (Montesinos, 1991: 82).

La política "populista" de Luis Echeverría generó una fuerte politización del sector privado que culminó en la creación del CCE, [4] en mayo de 1975, con el objetivo de contener las iniciativas estatales. Su pensamiento se manifiesta en la "Declaración de Principios" [5] donde se perfila una alternativa de proyecto nacional que se opone al sustentado por el grupo gobernante, el cual le sirve al sector privado para disputarle la dirección del desarrollo del país.

En las siguientes líneas mencionaré sólo los ejes centrales de la visión empresarial en relación con algunas cuestiones nacionales.

1. Delimitación de la actividad del Estado y su participación en la economía. Según los empresarios, el campo de acción del Estado se encuentra limitado por lo que dicte en lo económico el interés de los particulares, es decir, la participación directa del Estado en la economía tiene que ser limitada y transitoria, lo que significa la cancelación de toda intervención estatal de contenido puramente nacional-popular.

2. Ejercicio restrictivo del gasto público. Para la iniciativa privada, el Estado debe limitar su gasto cancelando sus partidas de beneficio social y subsidios al consumo, los cuales inhiben la inversión y restringen las libres fuerzas del mercado. En este sentido los empresarios se declaran en contra del encaje legal que opera sobre la banca privada y también se oponen a toda medida que provoque y aumente la inversión competitiva del Estado. Además enfatizan que las empresas de participación estatal que compitan con la iniciativa privada no deben de gozar de subsidios que las coloquen en una situación privilegiada.

3. Liberación del mercado de bienes y servicios. El sector empresarial pugna por que el control de precios sea transitorio, ya que desalienta la inversión y provoca el estancamiento económico, lo cual significa que la satisfacción de las necesidades de bienes y servicios está sujeta a la liberación del mercado. Para los empresarios, el Estado es un fuerte obstáculo que relativiza el grado de libertad con que opera el mercado.

4. Estímulo al incremento de la productividad. Para los empresarios es fundamental el logro de un nivel de productividad adecuado a los requerimientos económicos y sociales del país (Cordero et al., 1984: 119).

5. En relación con la educación, el documento de los empresarios hace referencia a la Declaración de los Derechos del Hombre para afirmar "el derecho y la obligación original" de los padres de educar a sus hijos, limitando el papel del Estado a proporcionar un clima de libertad que facilite la participación del sector privado en la programación y la realización de las tareas educativas. Asimismo, el sector privado considera que la educación es "factor esencial para el progreso económico en lo que respecta a la formación de técnicos, de profesionistas y de mano de obra capacitada" (Arriola, 1988: 71).

6. Respecto a los medios masivos de comunicación, la iniciativa privada propone su reglamentación con la finalidad de no atentar "contra la moral ni el orden público". Considera fundamental que se preserve la propiedad privada de tales medios y que "la

intervención estatal se cifra estrictamente al respeto de las libertades de prensa y palabra que garantiza la Constitución" (Arriola, 1988: 71).

De acuerdo con Salvador Cordero, lo que se puede apreciar del proyecto empresarial es que no incorpora una visión global que incluya los intereses de toda la sociedad. Más bien es un proyecto parcial que expresa la orientación y los intereses de un grupo específico que lo sustenta de manera particular; es privativo puesto que define la utilización y la organización de los recursos que se encuentran en el territorio en función de sus propios intereses; es restrictivo porque se basa en la atención de las necesidades del sector que lo sustenta, en contra de aquellos que se oponen al proyecto; y excluyente en la medida en que concibe la necesidad de un orden político-económico capaz de dar paso a sus intereses.

El proyecto empresarial es una posición concreta que ha venido adquiriendo forma de conflicto con el grupo gobernante y que se ha delineado como alternativo al tradicionalmente propuesto por la burocracia política.

La expresión del nuevo proyecto empresarial se encuentra en la crisis de 1976, cuyo origen estuvo en el enfrentamiento de estos sectores con las políticas del régimen de Luis Echeverría. Por un lado como respuesta a la crisis económica, a la movilización popular y a las medidas reformistas de este gobierno, y por otro, como toma de conciencia de su nueva ubicación en la sociedad mexicana. A partir de este momento, los empresarios han venido impugnando al régimen y proponiendo alternativas concretas a las políticas económicas del gobierno y a sus planes de desarrollo, generando un programa para reordenar el desarrollo económico del país e incluso disputando la hegemonía, es decir, el proyecto nacional (Cordero et al., 1984: 134). De ahí que sus posturas vayan desde la decisión de participar activamente en política, el reto al populismo, la crítica frontal al régimen de Echeverría y la insistencia de que México ingresase al GATT, hasta la intención de modificar los valores de la sociedad mexicana mediante el control de los medios masivos de comunicación y su participación en el sistema educativo.

Cabe señalar que al finalizar el período echeverrista el ambiente se encuentra lleno de presiones y movilizaciones sociales, las luchas obreras se incrementan, las invasiones en el campo por demanda de tierra proliferan masivamente, la economía decae y los empresarios entran en una fase de total enfrentamiento con el gobierno, utilizando la fuga de capitales como instrumento de presión política y económica. Frente a esta situación el gobierno tuvo que recurrir al endeudamiento externo, el cual fue desbordando las posibilidades de recuperación de la economía nacional. La acción empresarial acrecentó la crisis de un modelo de desarrollo que ya había dado señales de su agotamiento desde el principio de ese régimen. A tal grado llegaba el conflicto entre el Estado y los empresarios, que éstos, conscientes de que expresar sus simpatías por algún candidato prácticamente anularía la posibilidad de su postulación, optaron por no manifestarse políticamente. Fue hasta mediados de 1975 cuando se dio a conocer la candidatura priísta de José López Portillo, en un proceso electoral donde la oposición no presentó candidato a la Presidencia (Montesinos, 1991: 84), por lo que el sector empresarial manifestó su aprobación por el candidato electo.

Finalmente cabe considerar otra de las medidas que agudizaron la crisis de confianza del sector empresarial: la Ley de los Asentamientos Humanos de 1976 para expropiar tierras en Sonora y formar ejidos. Tal medida, que tenía como objetivo frenar la movilización campesina en el norte del país, significó un duro golpe a los grandes propietarios y dio lugar a una participación política más agresiva por parte del sector empresarial. Ejemplo de ello es Manuel J. Clouthier, jefe de una de las familias afectadas, cuya actividad

política lo "condujo a la candidatura presidencial postulada por el PAN en las elecciones de 1988" (Montesinos, 1991: 84).

II. La reconciliación

En el momento de la toma de posesión, el grupo lopezportillista se enfrentaba con las siguientes urgencias: reactivar la economía mediante el incremento de los índices de inversión y productividad, disminuir la tasa de desempleo, recuperar la confianza del sector privado asegurándole condiciones sociopolíticas para la inversión y la ganancia, restablecer la autoridad del Estado como árbitro supremo de los conflictos sociales, fortalecer la imagen del Ejecutivo y ampliar los márgenes de representatividad que se habían deteriorado. Sin embargo, políticamente lo prioritario era restablecer los vínculos cordiales con el sector privado.

La reconciliación del empresariado con la clase política lopezportillista fue muy rápida debido al boom petrolero y a las concesiones económicas que ésta, muy afín a sus intereses, le otorgó. El petróleo como factor de recuperación económica dotaba a la burocracia política de capacidad negociadora ante la iniciativa privada y el capital extranjero en la medida en que recuperaba su autonomía para orientar la inversión, manteniendo así su hegemonía en la conducción de la economía, situación que se planteó desde dos cuestiones fundamentales: por un lado activar la producción industrial en torno de la petrolera con la finalidad de incrementar las fuentes de empleo y fortalecer la situación financiera con divisas generadas con la exportación del crudo y, por otro, gracias a "la Reforma Política, para transformar las instituciones democráticas del régimen, y la Alianza Popular Nacional Democrática para la Producción, como estrategia para recuperar y superar la crisis" (Basáñez, 1991: 65), que tenían como objetivo recuperar la confianza del sector privado y reactivarlo económicamente.

La Alianza para la Producción tenía como finalidad fincar las bases que permitieran consolidar la economía en el mediano plazo y crecer en los dos últimos años del régimen. Con este proyecto los empresarios fueron alentados, subsidiados y apoyados fiscal y financieramente, lo que permitió recuperar su confianza. Sin embargo, su actividad política se desarticuló, lo que hizo que sus acciones aparecieran de forma fragmentada y que el Estado pudiera manejar la situación con relativa autonomía.

En este período la iniciativa privada no cuestionaba las medidas de recuperación, pero "sí criticaba los mecanismos para controlar la inflación y el déficit del presupuesto público. Los empresarios nacionales concluían, desde entonces, que la causa de la crisis económica era el excesivo gasto público" (Montesinos, 1991: 87).

A finales del sexenio de López Portillo se contemplaba una situación de profundo déficit presupuestario, devaluación del peso e inflación, lo que reflejaba que el crecimiento económico propiciado por el auge petrolero era ficticio.

El primer descalabro se dio en julio de 1981, cuando el precio del petróleo en el mercado internacional bajó de 34 a 29 dólares por barril. El segundo, a principios de 1982, cuando se autorizaron los incrementos salariales. Y el tercero, con la decisión del Banco de México de retirarse del mercado cambiario, con lo que se propició aún más la especulación cambiaria y la fuga de capitales. Esta última situación no refleja necesariamente la intención de los empresarios mexicanos para presionar al gobierno, sino que (...) refleja la intención de ese sector para hacer rendir más su capital, sin importarles las condiciones económicas del país (Montesinos, 1991: 87).

Sin embargo esta medida, propiciada por los empresarios, afectó la situación financiera y condujo nuevamente al conflicto con el Estado.

III. Reorganización política de los empresarios

La crisis económica y fundamentalmente la nacionalización bancaria de septiembre de 1982, [6] impulsaron al empresariado a una súbita recuperación de los cambios iniciados en su cultura política a mediados de la década de los setenta, por lo tanto se evidencia "la emergencia de una nueva voluntad política empresarial, dispuesta a modificar la estrategia de desarrollo económico y el sistema político para adecuarlo a su propia visión de lo que debe ser" (Tirado, 1990: 54).

Aunque sólo la fracción financiera resultó afectada, la clase empresarial en su conjunto reaccionó en contra del poder "dictatorial" del Presidente y centró sus críticas en la figura presidencial. Jorge Chapa Salazar, quien era presidente del CCE, apuntaba lo siguiente: "...el sistema político ha sufrido desgastes y ha tenido graves errores... cuyo origen han sido decisiones unipersonales de propia estructura presidencialista" (Jacobo, 1985: 21). Es decir, el sistema presidencial ya no era confiable.

La nacionalización de la banca significó el último intento de la burocracia política por mantener el papel hegemónico en la conducción del proyecto nacional, pero también el agotamiento de un modelo de desarrollo que se había caracterizado por un alto grado de intervencionismo estatal en la economía, lo cual en este marco ya no era benéfico para los sectores empresariales. En este sentido, la nacionalización bancaria "marca el parteaguas desde el cual es posible observar el proceso de construcción de un nuevo modelo de desarrollo de carácter neoliberal" (Montesinos, 1992: 108-109).

Los sectores empresariales se reorganizaron políticamente en tres vías: a) la tradicional o económico-administrativa, b) la cívico-social y c) la partidista-electoral (Tirado, 1990: 55).

a) Campo económico administrativo

En éste el sector privado demandó la adopción radical del proyecto neoliberal y la implantación de instancias de concertación neocorporativas privatistas (Tirado, 1990: 55).

Mediante esta vía tradicional, gestionada por cámaras, consejos, confederaciones y asociaciones, [7] se dieron tres procesos:

-Radicalización de ciertas organizaciones empresariales en contra del Estado, lo que se manifestó en el tono de sus declaraciones, la participación de muchos de sus miembros en el PAN y el apoyo, en ocasiones explícito, a los partidos políticos de derecha y a organizaciones civiles antiestatistas.

-Alejamiento de organizaciones radicalizadas (Concanaco, Coparmex) de las que aún continúan privilegiando los cauces gubernamentales para ejercer presión en la defensa de sus intereses (Concamín, Canacintra), lo cual dio lugar a desavenencias entre los organismos representativos de la iniciativa privada.

-La representatividad de las organizaciones empresariales ha estado sujeta a un severo cuestionamiento en el conjunto de sus miembros. Este desgaste se debió a la exclusión de grupos importantes en los puestos directivos de los organismos cúpula, a la política "gobiernista" y al enfrentamiento y la ruptura entre dirigencias nacionales y organismos sectoriales o regionales que en ocasiones dieron lugar a la formación de organismos empresariales independientes (el surgimiento de Consejo Coordinador de Asociaciones

Industriales, de la Asociación Nacional de Micro, Pequeña y Mediana Industria y de la Asociación Nacional de Industriales de la Transformación son muestra de esta tendencia en el período de 1982 a 1986) (San Pedro, 1991: 6).

Por otra parte, la postura empresarial en relación con el sindicalismo se manifestaba por una redefinición del corporativismo sindical, cuyo portavoz ha sido la Coparmex "encabezando los debates sobre la flexibilidad del trabajo y la modificación del artículo 123 constitucional y la nueva Ley Federal del Trabajo" (San Pedro, 1991: 7). La promoción de dicha Ley tenía como objetivo fundamental consolidar el proyecto de reestructuración de la industria nacional y las nuevas relaciones laborales y la modernización en los sindicatos para restar fuerza a los dirigentes sindicales tradicionales (sobre este aspecto el gobierno de Salinas de Gortari ha impulsado algunas medidas, como el golpe al quinismo y la firma del Acuerdo Nacional para Elevar la Productividad y la Calidad, el 25 de mayo de 1992, en el cual se confirman las garantías que tiene el empresariado en el proceso de flexibilización laboral, entre otras).

Cabe destacar que mediante el discurso de las organizaciones empresariales, en 1985 éstas presionaban al Estado con censuras a la élite política y demandando medidas favorables a su proyecto de nación, a pesar de que ya se estuvieran implantando bajo la dirección del Estado (Montesinos, 1991: 96).

En su postura crítica, las organizaciones empresariales se centraban en las medidas económicas o fiscales inadecuadas, el control de precios, el proceso electoral, la expropiación de los predios urbanos y la intervención estatal en la economía (Montesinos, 1991: 96).

En relación con las demandas, la iniciativa privada delineaba los rasgos del proyecto neoliberal. En el año de 1985 los empresarios demandaron "austeridad y ajuste presupuestario, liberación de precios y comercio, apoyo financiero y/o fiscal, reprivatización de la economía y salarios moderados (Montesinos, 1991: 96).

Cabe señalar algunas de las propuestas concretas del sector empresarial al respecto:

-La Coparmex, durante su Asamblea General Ordinaria de marzo de 1985, hizo una propuesta de modelo de desarrollo para la sociedad mexicana que se resume en los siguientes puntos:

1. Titular la tierra a los campesinos. [8]
2. Que el gobierno solamente actúe en las áreas que le corresponden.
3. Que sean los particulares quienes promuevan el progreso real de los mexicanos, particularmente a través del fomento de la microempresa.
4. Recuperar económicamente al país mediante las siguientes condiciones: a) abatir la inflación; b) eliminar el control de precios; c) liquidar o vender las empresas paraestatales; d) lograr la simplificación administrativa y la reducción de la burocracia; e) reducir los impuestos, particularmente el IVA; f) reordenar los modelos hacia la exportación despetrolizando nuestra economía, aplicando la libertad cambiaria y una paridad realista, no compensar la balanza con empréstitos y eliminar cuellos de botella que son responsabilidad y función indiscutida del gobierno; g) lograr la recuperación del poder adquisitivo de los salarios; h) eliminar el trabajo improductivo y modernizar la legislación laboral; i) fomentar el ahorro y la inversión; y j) lograr un crecimiento económico elevado y sostenido.

5. Fomentar una mayor participación social y política de los ciudadanos (Mariñez y Garavito, 1986: 10).

-El Centro Empresarial de Jalisco propuso, para reordenar la economía, acabar con el control de precios y con los subsidios, además de una desburocratización del sistema y agilización de los trámites fiscales (Mariñez y Garavito 1986: 26).

-La Canaco de la ciudad de México propuso derogar la disposición que obliga al comerciante a incluir el IVA en el precio final de los artículos y se manifestó por abrir las fronteras al comercio internacional, es decir, ingresar al GATT (Mariñez y Garavito, 1986: 26); además, disminuir el gasto público y fomentar programas de exportación.

b) ámbito cívico-social

La participación empresarial en este campo se caracterizó por el impulso que imprimió a las llamadas organizaciones intermedias, que le han servido para estructurar dentro del plano social un movimiento identificado con sus intereses mediante organizaciones con las que se encuadra a sectores específicos de la comunidad. Es decir, son grupos circunscritos a la defensa de un asunto específico, vinculados a organizaciones de padres de familia, organizaciones religiosas, estudiantiles, partidistas, que están orientados por temas como los derechos de la mujer, la educación privada, la lucha contra el aborto, campañas de control natal, de protección del voto, etc. (San Pedro, 1991: 8). Sin embargo, estos grupos comparten postulados básicos del pensamiento empresarial como la defensa de los derechos del individuo, la defensa de la propiedad privada y la libre empresa, así como posiciones antiestatistas, actitudes eficientistas y moralistas con referentes religiosos, entre otros (Pérez et al., 1991: 130). Ejemplo de ello fue la campaña presidencial de Clouthier, de cuya candidatura los principales impulsores fueron organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia, el Ejército Democrático, el Frente de Solidaridad Empresarial, la Asociación Nacional Cívica Femenina y el Comité Pro-defensa del Voto, entre otras.

Concebir al Estado como corrupto permitió a los diversos grupos legitimar la acción política de los empresarios. La nacionalización de la banca constituyó la base desde la cual los grupos sociales demandaban "menor Estado y mayor sociedad civil". Por tanto, en la campaña del 88, organismos de esta naturaleza fueron los principales impulsores de la candidatura de Clouthier (San Pedro, 1991: 9).

c) Campo partidista-electoral

Este terreno de acción fue para la iniciativa privada el más confiable para defender sus intereses y participar en la conducción del proyecto hegemónico. Gran número de empresarios participaron como candidatos a puestos de elección popular en el PRI y en el PAN, fundamentalmente.

Por un lado los empresarios de Norte, sobre todo pequeños y medianos, representantes del ala radical, tomaron posiciones en el PAN. Cabe mencionar las candidaturas a gobernador de Adalberto Rosas en Sonora, de Francisco Barrio Terrazas, ex-presidente del Centro Patronal del Norte, en Chihuahua, y de Fernando Canales Clariond, ex-presidente de la Canaco de Monterrey, en Nuevo León (Montesinos, 1992: 111), el liderazgo de la figura de Clouthier en la campaña presidencial de 1988 y la presencia de Ernesto Ruffo en Baja California como primer gobernador de un partido de oposición en México.

Por otra parte, dentro del PRI, el empresariado ha optado por una presión interna para elegir a candidatos favorables a sus intereses y arribar a puestos públicos importantes en el gobierno salinista. Esta "filtración" empresarial en el partido oficial ha sido ostensible en el perfil de los candidatos priístas en algunas elecciones como las de Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Michoacán, por mencionar algunos casos.

Desde el ambiente preelectoral de 1988 fue fundamental la participación del empresariado en el PRI, la cual se vio plasmada en la conformación de la Comisión de Financiamiento y Fortalecimiento Patrimonial de ese partido. Los empresarios en esta organización se beneficiaron con la venta de las paraestatales en la etapa de privatización de entidades públicas que emprendió el gobierno de Salinas. Finalmente, en la estructura misma del PRI se creó la Asociación Nacional de Promotores del Desarrollo, que agrupa a los empresarios y está afiliado a la UNE. La intervención de los empresarios en el partido oficial garantiza su participación en la toma de decisiones y de esta manera respalda sus intereses concretos de clase.

Así lo demostró el hecho de que Miguel Alemán Velasco, miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), fuera nombrado por Salinas de Gortari como embajador plenipotenciario, además de ser elegido como senador por el estado de Veracruz. Otro caso semejante es el de Claudio X. González, miembro del CMHN, quien fue nombrado asesor presidencial en inversión extranjera (Montesinos, 1992: 113).

IV. El camino a la concertación

La llegada de Miguel de la Madrid a la Presidencia de la República fue recibida positivamente por los empresarios mexicanos, puesto que mostró desde un principio el deseo de pactar con ellos. Como el punto de tensión se encontraba en la nacionalización de la banca, una de las primeras medidas fue iniciar el proceso de desnacionalización con la venta de 34 por ciento de las acciones de los bancos y dejar en manos del capital financiero privado el manejo de las casas de bolsa, que se constituirían en banca paralela. En igual sentido operó "la constitución de un Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca) para la documentación en moneda nacional de los adeudos en dólares de los grandes consorcios privados" (Montesinos, 1991: 90).

En el régimen de Miguel de la Madrid se intentó convocar a los desencantados y promover el desarrollo de nuevos sectores burgueses eficientes, modernos y competitivos, para lo cual se diseñaron diversos planes y programas. En el discurso de toma de posesión de De la Madrid se anunció el Programa Inmediato de Recuperación Económica (PIRE), el cual establecía una nueva alianza con los empresarios y definía su participación como fundamental para sentar las bases del proyecto de nación de ese gobierno. En el programa se destacaban los siguientes puntos: disminuir el gasto público, es decir, manejar un presupuesto austero que mantuviese los "servicios públicos a nivel indispensable" y conservase sólo los programas prioritarios de inversión; estimular programas de producción y distribución de alimentos básicos; aumentar los ingresos públicos mediante la reforma fiscal y el incremento de precios y tarifas de bienes y servicios públicos; eliminar subsidios; reestructurar la administración pública federal; y, finalmente, actuar bajo el principio de rectoría del Estado dentro de un régimen de economía mixta (Millán, 1988: 159-160).

Paralelamente, el nuevo régimen fue redefiniendo su discurso en función de dos categorías: la renovación moral y el realismo económico, que corresponden a una nueva forma de legitimación ante la sociedad pero fundamentalmente atienden a las demandas del sector privado. "En efecto, moral y realismo se contraponen a corrupción y ficción; son

la dualidad que ha de exorcizar a la trilogía causante de los males del país: populismo=corrupción=crisis "(Millán, 1988: 161).

Otros programas de mediano plazo en donde se plasmaban algunas de las más importantes demandas de los empresarios eran los siguientes:

-El Programa Nacional para el Financiamiento del Desarrollo (Pronafide), el cual tenía como objetivo "refuncionalizar el sistema financiero, resarcir los espacios perdidos por la burguesía financiera como consecuencia de la nacionalización" (Jacobo, 1985: 30). Con este programa se restringen las funciones de las sociedades nacionales de crédito para dejar en manos de particulares el intermediarismo financiero no bancario, o sea, aseguradoras, mercado de valores, casas de bolsa, arrendadoras, etcétera.

-El Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (Pronafice) respondía a las críticas de competencia desleal e intervencionismo de las paraestatales y pretendía hacer frente al fantasma del estatismo. El Programa, cuya ejecución era obligatoria para el sector público federal y concertada con los sectores social y privado, definía áreas de participación de aquél en los siguientes rubros: a) áreas estratégicas: petróleo, derivados y petroquímica; b) áreas de concurrencia prioritaria: industria pesada (en este caso la participación del sector paraestatal era no competitiva, sino sólo un instrumento catalizador y promotor del desarrollo industrial); y c) áreas de concurrencia complementaria, las cuales estaban destinadas a los sectores social y privado y en ellas intervendría el Estado sólo cuando hubiese un interés social: primero, procurando impulsar políticas de fomento y financiamiento; segundo, promoviendo coinversiones y, sólo en caso extremo, recurriendo a la inversión social (Jacobo, 1985: 31).

La beligerancia empresarial fue aguda en casi todo el sexenio de Miguel de la Madrid, pero al final se vio atenuada por la política económica caracterizada por un proceso de reprivatización y contracción del déficit gubernamental vía gasto público, medidas que fueron favorables a los empresarios puesto que reactivaron sus inversiones (Pérez et al., 1991: 131).

Entre otros elementos de la concertación se puede mencionar el Pacto de Solidaridad Económica firmado por el CCE, encabezado por Agustín Legorreta, y por la CTM, representada por Fidel Velázquez.

De tal manera que el nuevo "pacto" estaría legitimado en el apoyo global de la sociedad. Las principales medidas del pacto eran la política de tope salarial, que se aceptaba (aun) cuando el líder de la CTM había amenazado unos días antes con la huelga nacional, y el control de precios (...). Por otro lado, el hecho de que Legorreta presida el CCE sugiere que la facción financiera había recobrado la hegemonía en la representación del empresariado nacional, así como se tendría que reconocer la alianza con la élite política al aceptar su participación en la concertación. Así lo mostraba el tono que tomaban las declaraciones del CCE, en el sentido de que esta organización agrupaba a los 300 empresarios que decidían el rumbo de la nación (Montesinos, 1991: 93).

La firma del Pacto se daba en un ambiente de patentes contradicciones, puesto que si por un lado se reconocía la alianza con el empresariado, por otro aún había fuertes fisuras en la posición empresarial como efecto de la nacionalización bancaria, y por tanto la facción radical del norte del país no aceptaba la alianza con el gobierno y su participación en el PAN continuaba apuntando a las elecciones de 1988. [9]

Los mecanismos de identificación política entre los empresarios y la nueva élite gobernante se han dado en la confluencia de los principios neoliberales, asociados a un

nuevo marco de relaciones político- administrativas en el que predominan criterios de eficiencia y productividad, en oposición a criterios populistas (Luna, 1988: 73). Tales criterios han constituido el eje central del proyecto político de modernización que han impulsado los políticos tecnócratas.

Otro mecanismo de alianza entre la nueva élite política y la élite económica ha sido el desconfiar de los burócratas políticos. Esto ha coincidido con la eliminación de viejos líderes políticos en organizaciones corporativas para poder llevar a cabo la consolidación del nuevo proyecto de desarrollo, el cual responde a los procesos actuales del neoliberalismo a nivel mundial.

De esta manera,

el acercamiento de los empresarios y el Estado se da en la medida en que el proyecto neoliberal se va instalando en el país; su influencia en la toma de decisiones se observa desde la designación de Salinas de Gortari como candidato por el PRI a la Presidencia, así como en las constantes invitaciones a los empresarios nacionales en la campaña electoral de ese candidato para participar en la elaboración del programa de gobierno 1988-1994 (Montesinos, 1991: 102).

Esta situación también se pudo apreciar en las elecciones estatales de 1992, donde se dieron algunos avances de la concertación con la integración de planillas a cargos de representación popular con miembros de la iniciativa privada participando en las dos principales fuerzas políticas, el PRI y el PAN.

En el PRI los empresarios incrementaron su influencia política al obtener la nominación de candidatos en aquellos estados de la República donde existe prioridad para acelerar el proyecto de desarrollo (Chihuahua y Michoacán con la postulación de Jesús Macías y Eduardo Villaseñor, respectivamente). Además contribuyeron al financiamiento de las campañas electorales de los candidatos priístas a las gubernaturas, como en Michoacán, donde la iniciativa privada constituyó un Comité de Finanzas que coordinó el empresario Agustín Barragán Garibay en la campaña de Eduardo Villaseñor; en Veracruz, donde los empresarios apoyaron financieramente la candidatura de Patricio Chirinos; y en Puebla, en los gastos de campaña de Manuel Bartlett. [10]

En lo que corresponde a la participación de los empresarios en el Partido Acción Nacional, se pudo apreciar una línea de concertación con el gobierno federal que le permitió obtener el "reconocimiento" del triunfo de Francisco Barrio en Chihuahua. La negociación con Acción Nacional giró en torno a la expectativa de dar continuidad al proyecto de desarrollo económico, particularmente en esa zona que pretende impulsar de manera intensiva la industria maquiladora, en la que el propio Barrio mantiene vínculos estrechos puesto que su origen es eminentemente empresarial.

Conclusiones

En la redefinición del proyecto nacional, la iniciativa privada logró influir en cierta forma en la implantación de la estrategia económica global y orientar ciertas políticas públicas. Fue desde la conformación de Consejo Coordinador Empresarial, en 1975, cuando este sector propuso un proyecto alternativo al sustentado por la burocracia política el cual le sirvió para disputarle la dirección del desarrollo del país con el objetivo de limitar la participación del Estado en la economía. Tal proyecto empresarial adquirió la forma de conflicto.

La reorganización política de los empresarios en 1982, a raíz de la nacionalización bancaria, fue fundamental puesto que se mostraron más dispuestos a modificar la estrategia global de desarrollo económico y del sistema político.

En la reorganización política de los empresarios en el ámbito económico-administrativo sus demandas delineaban los rasgos del proyecto neoliberal, tales como austeridad, ajuste presupuestario liberalización de precios y comercio y reprivatización de la economía. Tales demandas coincidieron con lo que Miguel de la Madrid se fijó como objetivo para lograr una recuperación económica, en el que cobran expresión los principios de la eficiencia, la productividad y la libre acción de las fuerzas del mercado. Tales medidas, expresión de una economía neoliberal, tuvieron como objetivo disminuir el déficit del sector público mediante la reducción del aparato burocrático y de los subsidios al consumo y a los bienes que producía el Estado, así como el control de los salarios y la liberalización del comercio internacional.

La participación política de los empresarios en el terreno cívico-social se plasmó en el impulso a las organizaciones civiles, las cuales les sirvieron para estructurar un movimiento identificado con sus intereses, es decir, apoyaron a aquellos grupos que comparten los postulados básicos del proyecto empresarial, tales como la defensa de los derechos del individuo, la propiedad privada y la libre empresa y las posiciones antiestatistas de "menor Estado y mayor sociedad civil".

En el campo de acción partidista-electoral, el empresariado logró participar en la conducción del proyecto hegemónico vinculándose a la estructura gubernamental y consiguiendo influencia partidista, fundamentalmente en el PRI y en Acción Nacional. La iniciativa privada logró influir en la renovación de las élites políticas tradicionales con el fin de centralizar el proyecto de nación, y de esta manera participar en el reacomodo del sistema político, que se hizo evidente desde 1982 con la llegada de los tecnócratas a los altos puestos del aparato estatal.

CITAS:

[*] Ayudante del área de Teoría de las Formaciones Sociales, Depto. de Sociología, UAM Azcapotzalco.

[1] Por cultura política se entiende "la síntesis heterogénea y en ocasiones contradictoria de valores, informaciones, juicios y expectativas que conforman la identidad política de los individuos, los grupos sociales o las organizaciones políticas. De estas premisas culturales se derivan hábitos y formas de comportamiento que... deben ser leídos como portadores de una cierta significación" (Roberto Gutiérrez, "Sobre el campo conceptual de la cultura política", mimeo, p. 7).

[2] La globalización económica se presenta como la nueva forma de revitalizar el capitalismo y se manifiesta en tres formas: a) integración, expresada en la Comunidad Europea, b) cooperación, manifestada en la Cuenca del Pacífico; y c) el Tratado de Libre Comercio.

[3] De acuerdo con Roger Bartra, el nacionalismo revolucionario se define, mínimamente, por las siguientes actitudes: "1) Una desconfianza hacia las grandes potencias (especialmente Estados Unidos), acompañada de dosis de xenofobia y de antiimperialismo; 2) una afirmación de las nacionalizaciones como forma de limitación de la propiedad de la tierra, del control de los recursos naturales y de la concentración del capital (lo que se concreta en el sistema ejidal, en el control estatal del petróleo y las limitaciones legales a la inversión de capital extranjero); 3) un amplio Estado fuerte

interventor, cuya fuerza excepcional es legitimada por su origen revolucionario y por su amplia base de masas ('la revolución institucionalizada')" (Bartra, 1989: 199).

[4] El CCE se constituye con las siguientes organizaciones: Concamín, Concanaco, Coparmex, Asociación de Banqueros, Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y Consejo Nacional Agropecuario. Sus funciones y objetivos serían los siguientes: ser una organización de carácter cívico que agrupe a todos los organismos del sector privado; difundir las tesis empresariales; y funcionar como una agrupación de consulta y opinión para los organismos que lo constituyen.

[5] Las dos fuentes centrales del discurso ideológico de los empresarios mexicanos son el liberalismo económico y la doctrina social de la Iglesia católica (Cordero et al., 1984. 102).

[6] La nacionalización bancaria era la única alternativa viable para contener la fuga de capitales y garantizar el ordenamiento de la banca nacional.

[7] Rafael Montesinos aclara que estas agrupaciones tienen que ser vistas como grupos de presión y no sólo como grupos de interés, superando la perspectiva de Roderic Camp, y al respecto acota lo siguiente: "El grupo de interés, si bien es apropiado para hacer referencia a la organización empresarial, el concepto destaca más la cuestión de aglutinar en torno de un interés común; el grupo de presión implica la organización en torno a un interés común que se plantea el objetivo de actuar políticamente para que ese interés común predomine sobre el interés de otros grupos" (Montesinos, 1991: 95).

[8] Esto coincide con la actual reforma al artículo 27 constitucional, donde los ejidatarios se convierten en propietarios de la tierra para hacer más productivo el campo.

[9] Cabe aclarar que los empresarios no son un grupo homogéneo. Se encuentran divididos en diferentes posiciones ideológicas: a) la proteccionista, cuyos portavoces son la Canacintra y la Concamín, quienes están en contra de aspectos fundamentales del proyecto neoliberal; b) la liberal conservadora, que se expresa a través de la Coparmex y la Concanaco, las que de manera muy enfática portan la nueva voluntad política empresarial y son quienes con mayor frecuencia inclinan sus preferencias hacia el PAN; y c) la tecnocrática, que se apoya en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y las asociaciones de casas de bolsa y de instituciones de seguros; se caracterizan por ser antiestadistas y son quienes tienen el liderazgo del empresariado.

[10] Proceso, núm. 854, 15 de marzo de 1993, México, pp. 8-9.

BIBLIOGRAFIA:

Arriola W., C. (1988), Los empresarios y el Estado. 1970-1982, UNAM, México.

Bartra, R. (1989), "La crisis del nacionalismo en México", en Revista Mexicana de Sociología, núm. 3, julio-sept., Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México.

Basáñez, M. (1991), El pulso de los sexenios. 20 años de crisis en México, Siglo XXI, México.

Cordero, S., R. Santín y R. Tirado (1984), "El proyecto empresarial: ¿alternativa de un proyecto nacional?", en varios autores, Clases dominantes y Estado en México, UNAM, México.

Gutiérrez López, R. (1992), "Sobre el campo conceptual de la cultura política", mimeo.

Jacobo, E. (1985), "Los empresarios o la danza de los vampiros", en *El Cotidiano*, año 2, núm. 10, marzo-abril, UAM Azcapotzalco, México, pp. 8-9.

Luna, M. (1988), "La derecha empresarial", en *El Cotidiano*, núm.24, julio-agosto, UAM Azcapotzalco, México.

Luna, y R. Tirado (1984), "Los empresarios y el gobierno: modalidades y perspectivas de relación en los años ochenta", en *Revista Mexicana de Sociología*, Año XLVI, vol. XVI, núm. 2, abril-junio, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México.

Mariñez, R., y R. Garavito (1986), "El sindicato ante el reto empresarial", en *El Cotidiano*, año 2, núm. 11, marzo-abril, UAM Azcapotzalco, México, pp. 20-35.

Millán, R. (1988), *Los empresarios ante el Estado y la sociedad*, Siglo XXI, México.

Montesinos, R. (1991), "La cultura política del empresariado en México (un análisis del discurso)", en *Sociológica*, año 6, núm. 17, sept.-dic., UAM Azcapotzalco, México, pp.75-105.

Montesinos, R. (1992), "Empresarios en el nuevo orden estatal", en *El Cotidiano*, año 8, núm. 50, sept.-octubre, UAM Azcapotzalco, México, pp. 108-114.

Pérez, N., Carrillo, De la Torre y Loyo (1991), "La derecha en México (1982-1990). Continuidades y rupturas", en *Sociológica*, año 6, núm. 15, enero-abril, UAM Azcapotzalco, México, pp. 125-158.

Salazar, L. (1991), "Nacionalismo, democracia y solidaridad", en *Cuaderno de Nexos*, núm. 42, dic., México, pp. iv-v.

San Pedro, P. (1991), "Las organizaciones empresariales y la cultura política nacional, 1988- 1990", mimeo.

Tirado, R. (1990), "Los empresarios y la política", en *El Cotidiano*, núm. 35, mayo-junio, UAM Azcapotzalco, pp. 54-58.